



XVI Foro Ministerial  
sobre Desarrollo de  
América Latina y el Caribe

BARBADOS

30-31 Octubre & 1 Noviembre 2024



**RESILIENCIA EN ACCIÓN:** POLÍTICAS SOCIALES PARA NAVEGAR LA  
INCERTIDUMBRE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

## **Mesa Temática 4:**

# **Financiamiento de la Resiliencia en Tiempos de Incertidumbre: Vinculación de los Sistemas Fiscales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible**





## Nota Técnica

### 1. Introducción

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están atravesando una combinación de desafíos sin precedentes. La pandemia de COVID-19 ha [exacerbado las condiciones socioeconómicas ya frágiles de la región](#), poniendo de relieve [profundas desigualdades estructurales y vulnerabilidades fiscales](#). Las finanzas públicas de la región, que ya enfrentaban desafíos por ingresos fiscales limitados y altos niveles de deuda, se han visto sometidas a una enorme presión a medida que los gobiernos respondieron a la crisis sanitaria con un mayor gasto en servicios de emergencia y programas de protección social. Como resultado, [los déficits fiscales se han disparado](#) y las relaciones deuda/PIB han aumentado marcadamente en toda la región. En muchos países, la deuda pública ha aumentado a [niveles insostenibles](#), lo que reduce el espacio fiscal para futuras inversiones en desarrollo y complica los esfuerzos de recuperación económica.

El impacto de la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones de los sistemas fiscales existentes, lo que pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque integral que alinee las políticas fiscales con los objetivos de desarrollo. Para generar resiliencia y lograr un crecimiento sostenible, los países de ALC podrían repensar las políticas fiscales para centrarse en inversiones a largo plazo en capital humano, sostenibilidad ambiental e inclusión social. Esto requiere un cambio fundamental en la forma en que los gobiernos generan y asignan recursos públicos, asegurando que los sistemas fiscales no solo respondan a las crisis inmediatas, sino que también [respalden los objetivos de desarrollo más amplios de la región](#).

Las consecuencias económicas de la pandemia fueron profundas, y la región experimentó su contracción económica más pronunciada en décadas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de ALC [se contrajo un 7,4% en 2020](#), lo que marca una de las caídas más pronunciadas a nivel mundial. La pandemia empujó a millones de personas a la pobreza, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que [otros 22 millones de personas en la región cayeron en la pobreza extrema](#), revirtiendo años de progreso en la reducción de la pobreza. La crisis ha [afectado desproporcionadamente a los grupos vulnerables](#), incluidas las mujeres, los trabajadores informales y las comunidades indígenas, lo que ha afianzado aún más las desigualdades existentes. [Las mujeres, en particular, se han visto desproporcionadamente afectadas](#) por la pérdida de empleos, ya que están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, el comercio minorista y el trabajo informal. Al mismo tiempo, el cambio climático sigue planteando una amenaza importante para las perspectivas de desarrollo de la región. [ALC es una de las regiones más vulnerables a los riesgos relacionados con el clima](#): el Caribe enfrenta huracanes cada vez más frecuentes, mientras que los países sudamericanos padecen graves sequías e inundaciones.

Para abordar estos desafíos interconectados se requiere un enfoque integral e integrado de la política fiscal que esté en consonancia con los objetivos de desarrollo. Para lograrlo, los gobiernos de ALC podrían desarrollar sistemas fiscales que prioricen la sostenibilidad, la resiliencia y la inclusión. Esto implica repensar las políticas tributarias, el gasto público y las estrategias de gestión de la deuda para garantizar que contribuyan a los objetivos de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, los gobiernos podrían explorar formas de ampliar las bases impositivas y reducir la evasión fiscal, que [sigue siendo un problema importante en toda la región](#).



Además de mejorar la recaudación de impuestos, las políticas fiscales deben integrar la resiliencia climática y la sostenibilidad ambiental. La región ha logrado algunos avances en este ámbito, con países como Chile y Colombia emitiendo bonos verdes para financiar proyectos de energía renovable e infraestructura sostenible. Sin embargo, es necesario ampliar estos esfuerzos en toda la región, con un mayor enfoque en el aprovechamiento de instrumentos financieros innovadores, como préstamos vinculados a la sostenibilidad e instrumentos de deuda contingente del Estado, que pueden proporcionar un alivio automático de la deuda en caso de grandes shocks económicos o desastres.

El sector privado también desempeña un papel crucial en la financiación del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. En un contexto de presión sobre las finanzas públicas, atraer inversión privada a través de asociaciones público-privadas (APP) y financiación combinada es esencial para financiar proyectos de desarrollo críticos. [Las APP se han utilizado con éxito](#) en países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú para financiar proyectos de infraestructura de gran escala, como carreteras, sistemas de agua e instalaciones energéticas, que son vitales para la recuperación económica y el crecimiento a largo plazo. [Según el BID](#), las APP en América Latina y el Caribe tienen el potencial de movilizar más de 200.000 millones de dólares en inversiones para 2030, siempre que los gobiernos creen entornos propicios a través de marcos regulatorios sólidos e incentivos fiscales que alienten la participación del sector privado en el desarrollo sostenible.

Esta nota técnica tiene como objetivo explorar cómo los países de América Latina y el Caribe pueden alinear sus sistemas fiscales con sus prioridades de desarrollo para generar resiliencia y promover el desarrollo sostenible en la región. Se examinarán los principales desafíos que enfrentan los gobiernos para financiar los esfuerzos de recuperación, incluidas las finanzas públicas limitadas, los niveles crecientes de deuda y la creciente vulnerabilidad a los desastres relacionados con el clima. La nota también examinará el papel de los instrumentos y mecanismos financieros innovadores, como los bonos verdes, la financiación combinada y la deuda contingente del Estado, para apoyar las inversiones sostenibles. Por último, el documento proporcionará recomendaciones sobre cómo los gobiernos pueden aprovechar la participación del sector privado para cerrar las brechas de financiación y alcanzar los ODS para 2030.

## 2. Contexto de los desafíos fiscales en ALC

El panorama económico de América Latina y el Caribe se ha visto afectado significativamente por la pandemia de COVID-19, lo que ha provocado severas contracciones de la producción, un aumento de la deuda pública y desequilibrios fiscales. En 2020, la economía mundial experimentó una contracción de aproximadamente el 4,3% del PIB debido a la pandemia, y América Latina y el Caribe registró algunas de las caídas más pronunciadas entre los mercados emergentes. [El PIB de la región cayó un 7,4%](#), lo que marca la recesión más pronunciada en más de un siglo.

Las finanzas públicas de América Latina y el Caribe se vieron sometidas a una profunda presión, ya que los gobiernos se apresuraron a responder a la emergencia sanitaria, asignar fondos para la protección social y ofrecer paquetes de estímulo económico. Este aumento significativo del gasto público dio lugar a un aumento [desmesurado de los déficits fiscales](#). [Datos del FMI](#) muestran que, entre 2019 y 2021, los déficits fiscales de la región crecieron en promedio seis puntos porcentuales, y varios países experimentaron aumentos mucho más pronunciados.



Los niveles de deuda en toda la región se han convertido en una preocupación creciente: la carga de deuda total de ALC supera ahora el 75% del PIB en muchos casos, y algunos países de la región han mostrado que sus ratios deuda/PIB superaron el 90% durante este período. Este dramático aumento de la deuda estuvo acompañado de una creciente vulnerabilidad a los shocks externos, como las alzas de las tasas de interés globales y la volatilidad de los precios de las materias primas. Estas vulnerabilidades han ejercido más presión sobre las economías de ALC, en particular las que dependen del financiamiento externo y de la exportación de materias primas.

La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de que los países de ALC adopten políticas fiscales más sostenibles que equilibren las necesidades de recuperación a corto plazo con los objetivos de desarrollo a largo plazo. Según el BID, la recuperación de la región podría llevar más tiempo que en otras partes del mundo, en particular si no se abordan los desequilibrios fiscales. El enfoque debe desplazarse hacia el fortalecimiento de la movilización de recursos internos, la mejora de la recaudación de impuestos y la implementación de reformas fiscales que reduzcan la dependencia del endeudamiento externo.

### *2.1 Impacto de la pandemia en los déficit fiscales y la deuda pública*

La dependencia de la región del endeudamiento externo, sumada al limitado espacio fiscal previo a la pandemia, agravó las consecuencias económicas. Según el Banco Mundial, se proyecta que la carga de la deuda de ALC seguirá siendo elevada en el futuro cercano, y varios países ya tienen dificultades para gestionar los crecientes costos del servicio de la deuda.

El FMI ha advertido que, sin reformas sustanciales encaminadas a mejorar la sostenibilidad fiscal, los países de América Latina y el Caribe se enfrentarán a riesgos crecientes de sobreendeudamiento. Esto es particularmente preocupante dada la exposición de la región a los mercados financieros globales, donde las condiciones monetarias más restrictivas en las economías avanzadas podrían conducir a mayores costos de endeudamiento y salidas de capital. A medida que las tasas de interés globales siguen aumentando, los países con grandes cargas de deuda son especialmente vulnerables a los shocks fiscales. Sin reformas sustanciales para estabilizar las finanzas públicas, estos países enfrentan riesgos elevados de sobreendeudamiento, especialmente mientras continúan lidiando con los impactos de la pandemia y shocks económicos externos como la inflación y las tensiones geopolíticas.

### *2.2 Desigualdad y vulnerabilidad a los shocks externos*

La pandemia también puso de relieve y exacerbó las desigualdades de larga data en la región. ALC es conocida por sus altos niveles de desigualdad de ingresos, con importantes disparidades en el acceso a la atención médica, la educación y la protección social. El shock económico causado por la COVID-19 amplió aún más estas brechas, empujando a millones de personas a la pobreza. Según la CEPAL, la pobreza extrema en ALC aumentó al 13,8% en 2020, revirtiendo años de progreso en la reducción de la pobreza. El impacto de la pandemia en los trabajadores informales, que representan casi el 50% de la fuerza laboral de la región, fue particularmente grave, ya que muchos carecían de acceso a sistemas formales de protección social.

Además de las vulnerabilidades sociales, la región sigue siendo muy susceptible a los riesgos relacionados con el clima. ALC es una de las regiones más propensas a desastres en el mundo, ya que enfrenta



huracanes, inundaciones y sequías frecuentes, que ejercen una presión adicional sobre los recursos fiscales. Los costos económicos de los desastres relacionados con el clima en la región son sustanciales: [según el BID](#), para 2050, los daños causados por el cambio climático podrían costarle a la región USD 100 mil millones anuales. Estos riesgos limitan aún más el espacio fiscal disponible para inversiones críticas en infraestructura y resiliencia climática, que son esenciales para alcanzar los objetivos de desarrollo.

### 2.3 Brechas fiscales en ALC

Incluso antes de la pandemia, muchos países de ALC enfrentaban brechas fiscales significativas debido a limitaciones en los sistemas de recaudación de impuestos, altos niveles de evasión fiscal y un gasto público ineficiente. [La evasión y elusión fiscal en ALC ascendió al 6,7% del PIB regional](#) (USD 433 mil millones) en 2023, lo que representa una pérdida significativa de ingresos públicos que podrían redirigirse hacia inversiones para el desarrollo. Además, un [gran sector informal](#)—que representa casi el 50% de la fuerza laboral en algunos países— reduce significativamente la base imponible, ya que los trabajadores y las empresas informales a menudo operan fuera del marco fiscal y regulatorio formal, lo que genera menores ingresos fiscales para los gobiernos.

La dependencia del endeudamiento externo para financiar los déficits fiscales ha llevado a [un aumento de los niveles de deuda](#), en particular en algunos países. Sin embargo, el endeudamiento para cubrir las brechas fiscales suele ir en detrimento de la sostenibilidad fiscal a largo plazo, ya que la carga del servicio de la deuda limita la capacidad futura de gasto e inversión. El [Banco Mundial señala](#) que, incluso cuando las tasas de interés son favorables, el aumento de la deuda pública, exacerbado por la pandemia, ha generado importantes presiones fiscales. Esta situación limita el margen de maniobra fiscal y restringe las inversiones futuras, lo que dificulta que los países financien proyectos de desarrollo a largo plazo.

La pandemia de COVID-19 amplió drásticamente las brechas fiscales en la región. Los gobiernos se vieron obligados a aumentar significativamente el gasto público para abordar la crisis sanitaria y brindar alivio económico. A esto se sumó la caída de los ingresos debido a la contracción económica. Entre 2019 y 2020, [los déficits fiscales en los países de ALC aumentaron](#) en promedio un 6% ([el déficit fiscal combinado de América Latina se expandió](#) del 3,8% del PIB en 2019 al 8,3% en 2020). En algunas de las economías más afectadas, como Argentina y Perú, los déficits aumentaron más del 10%, impulsados por los gastos de emergencia y la disminución de los ingresos durante la recesión económica.

## 3. Vinculación de los sistemas fiscales a los objetivos de desarrollo

Para alcanzar los ODS en 2030 es necesario un cambio transformador en la forma en que los gobiernos de América Latina y el Caribe financian sus prioridades de desarrollo. Alinear los sistemas fiscales con los ODS es un mecanismo importante para que el gasto público, las políticas tributarias y las estrategias de gestión de la deuda contribuyan directamente a los resultados del desarrollo sostenible, incluida la reducción de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento inclusivo. Sin embargo, muchos países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos para movilizar recursos internos adecuados y estructurar el gasto público de manera que sea coherente con los ODS.



### *3.1 Integración de los ODS en los presupuestos nacionales*

Una de las estrategias clave para vincular los sistemas fiscales con los ODS es la integración de las prioridades de los ODS en los presupuestos y marcos fiscales nacionales. Este proceso implica alinear los planes nacionales de gasto con los 17 ODS, asegurando que los fondos públicos se dirijan a sectores críticos como la salud, la educación, la acción climática y la protección social. Países como México y Costa Rica han logrado avances significativos en la incorporación de los ODS en sus procesos presupuestarios, utilizando indicadores de desempeño alineados con los ODS para hacer un seguimiento de la eficacia del gasto público.

En [Costa Rica](#), el Ministerio de Finanzas ha desarrollado una metodología para evaluar cómo las asignaciones presupuestarias nacionales contribuyen a cada ODS incorporando estos objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y otros marcos financieros estratégicos, lo que permite a los responsables de las políticas comprender mejor el impacto de sus decisiones fiscales. El enfoque del país se centra en la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la gestión de las finanzas públicas, con especial énfasis en la inclusión social y la igualdad de género en la presupuestación del sector público. Esta alineación apoya una asignación más eficiente de los recursos hacia sectores prioritarios como la educación, la salud y las iniciativas de desarrollo sostenible.

A su vez, [México](#) ha implementado un marco sólido que integra los ODS en su proceso presupuestario mediante una colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el PNUD. El proceso implica vincular el Plan Nacional de Desarrollo con las asignaciones presupuestarias, utilizar sistemas de evaluación del desempeño para monitorear la alineación con las metas de los ODS y emplear un enfoque de gestión basado en resultados para asegurar que el gasto público contribuya directamente a los ODS. El esfuerzo de México por incorporar los ODS en su planificación presupuestaria ha dado como resultado la integración de la mayoría de sus programas de desarrollo con el marco de los ODS, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público.

### *3.2. Fortalecimiento de la movilización de ingresos para el desarrollo sostenible*

Para que los países de ALC financien eficazmente los ODS, es esencial mejorar la movilización de recursos internos. Muchos países de la región sufren de bajos ingresos fiscales debido a sistemas tributarios débiles, altos niveles de evasión fiscal y una gran economía informal. [Según la OCDE](#), los ingresos fiscales en ALC representan solo el 22,9% del PIB en promedio, en comparación con el 34,1% en los países de la OCDE. Cerrar esta brecha es fundamental para generar los fondos necesarios para invertir en proyectos relacionados con los ODS.

En los últimos años, varios países de América Latina y el Caribe han introducido reformas tributarias progresivas destinadas a aumentar la recaudación de ingresos y reducir la desigualdad. En diciembre de 2020, [Argentina](#) aprobó un impuesto único a la riqueza llamado "Aporte Solidario Extraordinario", destinado a personas con activos por un valor de al menos AR\$ 200 millones (aproximadamente USD 2,4 millones). Las tasas impositivas oscilaban entre el 2% y el 5,25% sobre los activos nacionales y extranjeros. Los ingresos de este impuesto estaban destinados a respaldar los gastos relacionados con la pandemia, incluidos los suministros de atención médica, la ayuda a las pequeñas empresas y el apoyo financiero a las comunidades vulnerables afectadas por el COVID-19.





Además, las reformas tributarias en países como Chile y Colombia se han centrado en ampliar la base impositiva y reducir las prácticas tributarias regresivas, que afectan desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos. La reforma tributaria emblemática de [Colombia](#), implementada en 2022, se centró en hacer que el sistema tributario fuera más progresivo al aumentar los impuestos sobre los ingresos más altos y reducir los beneficios fiscales para ciertas industrias. El objetivo era garantizar que los sectores más ricos de la sociedad contribuyeran con una parte más justa de los ingresos nacionales, abordando directamente la desigualdad de ingresos. De manera similar, [Chile](#) ha tomado medidas para ajustar sus políticas tributarias a fin de distribuir mejor la carga fiscal y mejorar la equidad social. Estas reformas incluyen medidas para limitar las exenciones fiscales, aumentar los impuestos a las personas con mayores ingresos e introducir una estructura más progresiva en el sistema tributario.

Más allá de las reformas tributarias, los países de ALC también deberían centrarse en mejorar la administración tributaria y reducir la evasión fiscal, que le cuesta a la región miles de millones de dólares cada año, como se analizó anteriormente.

### *3.3. Promoción de instrumentos de financiación verdes y sostenibles*

Para cerrar la brecha financiera que existe para las prioridades de desarrollo, los gobiernos de América Latina y el Caribe recurren cada vez más a instrumentos financieros innovadores que se alinean con los objetivos ambientales y sociales. Los mecanismos de financiamiento verde, como los bonos verdes y los préstamos vinculados a la sostenibilidad, ofrecen una vía prometedora para movilizar recursos hacia proyectos de resiliencia climática y desarrollo sostenible.

Países como Chile y Colombia ya han sido pioneros en la emisión de bonos verdes, recaudando miles de millones de dólares para financiar iniciativas de energía renovable e infraestructura sostenible. En concreto, [las emisiones de bonos verdes de Chile](#) fueron especialmente exitosas: Chile fue el primer emisor soberano de ALC en vender bonos verdes, a partir de 2019, y desde entonces ha emitido un total de 25.900 millones de dólares en bonos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), incluidos 7.700 millones de dólares en bonos verdes. Colombia también emitió recientemente su primer bono verde en el mercado local, recaudando 197 millones de dólares, con una parte significativa destinada a financiar proyectos de agua, transporte, protección ambiental y energía renovable. Ampliar estas iniciativas en toda la región será fundamental para cerrar la brecha de financiación necesaria para alcanzar los ODS.

Además, los préstamos vinculados a la sostenibilidad, que vinculan las condiciones de los préstamos al logro de objetivos específicos de sostenibilidad, están ganando terreno en la región. Estos instrumentos ofrecen incentivos financieros tanto para los gobiernos como para las empresas privadas para invertir en proyectos que contribuyan a la acción climática, la energía limpia y la inclusión social. [Uruguay](#) ha participado activamente en el mercado de préstamos vinculados a la sostenibilidad. Se convirtió en el primer país en obtener un préstamo vinculado a la sostenibilidad de USD 350 millones del Banco Mundial, que vincula las condiciones de financiamiento a objetivos ambientales específicos, como la reducción de las emisiones de metano de su sector ganadero. Este préstamo innovador permite a Uruguay beneficiarse de tasas de interés reducidas si cumple con esos objetivos de sostenibilidad predefinidos.



### *3.4 Políticas fiscales inclusivas y con perspectiva de género*

Además de la financiación verde, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género es una herramienta poderosa para alinear los sistemas fiscales con los objetivos de desarrollo. La elaboración de presupuestos con perspectiva de género implica incorporar consideraciones de igualdad de género en la planificación y ejecución de los presupuestos nacionales para garantizar que el gasto público promueva el empoderamiento de las mujeres y reduzca las disparidades de género.

Países como México y Argentina han estado a la vanguardia en la implementación de marcos de PSG, utilizando auditorías y evaluaciones con enfoque de género para determinar el impacto de las políticas fiscales en las mujeres y los grupos marginados. [México](#) ha establecido uno de los sistemas de PSG más completos del mundo, con mecanismos para etiquetar y hacer un seguimiento de las asignaciones presupuestarias destinadas a promover la igualdad de género. Este sistema, conocido como Anexo 13, "Gastos para la igualdad entre mujeres y hombres", destina específicamente fondos para reducir las brechas de género a través de diversos programas e iniciativas públicas.

[Argentina](#) también ha logrado avances importantes al integrar consideraciones de género en su presupuesto nacional. El presupuesto del país ahora incluye una perspectiva de género, con asignaciones específicas para programas destinados a cerrar las brechas de género y promover la autonomía de las mujeres en áreas como la participación económica y la toma de decisiones.

Estas medidas cuentan con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que realizan auditorías de género y abogan por una implementación transparente de estas políticas para exigir responsabilidades a los gobiernos. Estos esfuerzos no sólo han contribuido a una mayor igualdad de género, sino que también han mejorado la eficacia general del gasto público al garantizar que los recursos se asignen de manera que beneficien a todos los segmentos de la sociedad.

### *3.5. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas fiscales*

Por último, la transparencia y la rendición de cuentas fiscales son componentes fundamentales de los sistemas fiscales alineados con el desarrollo. Garantizar que el gasto público sea transparente y esté sujeto a escrutinio ayuda a generar confianza en las instituciones gubernamentales y garantiza que los recursos se utilicen de manera eficaz. En este sentido, las herramientas digitales y las plataformas de datos abiertos pueden desempeñar un papel crucial para mejorar la transparencia del gasto público y la participación ciudadana en el proceso presupuestario.

Países como Uruguay y Costa Rica han introducido iniciativas de presupuesto abierto, que permiten a los ciudadanos hacer un seguimiento de cómo se gastan los fondos públicos y evaluar la alineación del gasto gubernamental con las metas de los ODS. En [Uruguay](#), el gobierno ha establecido mecanismos a través de su Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para garantizar que las políticas y los presupuestos nacionales estén estrechamente alineados con los objetivos de los ODS. Este sistema permite un seguimiento transparente de los fondos públicos y el progreso de las metas de los ODS, fomentando la rendición de cuentas y la participación pública en el proceso de toma de decisiones.

[Costa Rica](#) también ha dado pasos importantes en la implementación de iniciativas de presupuesto abierto, con énfasis en la transparencia y la asignación eficiente de recursos hacia proyectos relacionados con los





ODS. El país utiliza plataformas digitales para divulgar información presupuestaria, lo que fomenta la participación ciudadana y el control en las decisiones de gasto público.

Estas iniciativas no sólo promueven la rendición de cuentas, sino que también empoderan a los ciudadanos para participar en el proceso de toma de decisiones, garantizando que las políticas fiscales reflejen las necesidades y prioridades de la población.

## 4. El papel del sector privado

El sector privado desempeña un papel fundamental en la financiación y el logro de los ODS en América Latina y el Caribe. Los recursos públicos por sí solos no son suficientes para cubrir la brecha de financiación que enfrenta la región para alcanzar los ODS en 2030. Aprovechar el capital privado a través de instrumentos financieros y alianzas innovadoras es esencial para cerrar esta brecha y garantizar que las inversiones se dirijan hacia un crecimiento inclusivo y sostenible.

### 4.1 Asociaciones público-privadas (APP) y financiación combinada

Las asociaciones público-privadas (APP) y los mecanismos de financiación combinada ofrecen herramientas eficaces para movilizar capital privado con el fin de financiar infraestructuras y servicios públicos esenciales que contribuyen al logro de los ODS. Estos instrumentos permiten a los gobiernos aunar recursos públicos con inversiones privadas, compartiendo riesgos y beneficios para financiar proyectos de gran escala en sectores como el transporte, la energía, la atención sanitaria y la educación.

Por ejemplo, Perú ha sido un país líder en el uso de las asociaciones público-privadas para financiar proyectos de infraestructura. A través del [proyecto de asociación público-privada "Línea 2 del Metro de Lima"](#), el gobierno peruano se asoció con empresas del sector privado para construir un sistema de metro de 5.600 millones de dólares destinado a reducir la congestión vehicular, mejorar el transporte público y reducir las emisiones de carbono en la capital.

Otro mecanismo en auge en la región es el financiamiento mixto, que combina fondos públicos de desarrollo con capital privado para reducir los riesgos de inversión. En [México](#), los Fondos de Inversión en el Clima (CIF) combinaron financiamiento público y privado para apoyar el desarrollo de la energía geotérmica. Por ejemplo, el BID aprobó una modificación de préstamo de aproximadamente USD 108,6 millones para promover inversiones privadas en la generación de electricidad geotérmica. Este programa tiene como objetivo financiar hasta 300 MW de capacidad geotérmica y se espera que apalanque aproximadamente USD 4.200 millones adicionales en inversiones públicas y privadas. Al reducir el riesgo de las inversiones privadas, el financiamiento de los CIF atrajo la participación del sector privado, lo que resultó en una inversión sustancial en proyectos de energía limpia.

### 4.2 Movilización de capital privado para el desarrollo sostenible

La participación del sector privado es vital para financiar inversiones a gran escala en infraestructura, energía renovable, atención de la salud y educación, todas ellas fundamentales para alcanzar los ODS. Los bonos verdes, los préstamos vinculados a la sostenibilidad y los bonos de impacto social son instrumentos



financieros innovadores que permiten a los gobiernos y las empresas recaudar capital para proyectos alineados con los ODS.

Como ya se mencionó, Chile ha estado a la vanguardia de la emisión de bonos verdes, recaudando más de 5 mil millones de dólares desde 2019 para financiar proyectos centrados en energías renovables, transporte limpio y resiliencia climática. Estos bonos atraen a inversores internacionales que buscan financiar proyectos que se alineen con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Además, Brasil ha utilizado préstamos vinculados a la sostenibilidad que vinculan las condiciones de los préstamos a objetivos de sostenibilidad específicos, lo que alienta a las empresas a mejorar su impacto ambiental y social mientras acceden a financiamiento favorable.

#### *4.3 Innovación y modelos de negocio sostenibles*

Las empresas privadas están adoptando cada vez más modelos de negocio sostenibles que contribuyen a los ODS. El auge de la inversión de impacto, en la que los rendimientos financieros se combinan con resultados sociales y ambientales mensurables, está transformando la forma en que el sector privado apoya los objetivos de desarrollo. Por ejemplo, las empresas agroindustriales [colombianas](#) han sido pioneras en el uso de inversiones de impacto para desarrollar prácticas agrícolas sostenibles, mejorar la seguridad alimentaria y reducir la degradación ambiental, creando al mismo tiempo prácticas comerciales ambientalmente sostenibles. Una iniciativa destacada es la colaboración con los productores de cacao en [la Orinoquia](#), donde se realizan esfuerzos para establecer cadenas de suministro más eficientes y sostenibles. Esto implica rehabilitar tierras previamente despejadas y aumentar los ingresos de los agricultores locales permitiéndoles cultivar cacao de manera sostenible. Además, la integración de prácticas climáticamente inteligentes dentro de estos sectores agrícolas se considera esencial para [fomentar la resiliencia y mejorar los medios de vida](#), especialmente en las regiones afectadas por el conflicto.

Además, la creación de valor compartido, una estrategia en la que las empresas alinean sus objetivos de rentabilidad con las necesidades de la sociedad, está ganando terreno en la región. Las empresas de sectores como la agroindustria, la tecnología y las finanzas están desarrollando productos y servicios que abordan los desafíos relacionados con los ODS y, al mismo tiempo, generan retornos financieros. Este modelo ayuda a las empresas a generar resiliencia, fomentar la innovación y apoyar el crecimiento inclusivo, al tiempo que contribuye al desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha participado activamente en la financiación de proyectos agroindustriales a través de iniciativas como el [préstamo verde de 80 millones de dólares](#) a la Corporación Latinoamericana de Desarrollo de los Agronegocios (LAAD). Esta inversión tiene como objetivo apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la adopción de prácticas sostenibles y la mejora de la eficiencia en el uso del agua. Este tipo de financiación es crucial para mejorar el acceso al capital de las agroindustrias, que a menudo tienen dificultades para conseguir financiación debido a su tamaño y a los riesgos percibidos.

Además, [la inversión de impacto en ALC ha ido creciendo](#), con un aumento notable de las empresas centradas en el desarrollo agrícola, la energía renovable y la inclusión financiera. Una parte importante de las inversiones de impacto se destinan a la agricultura y el desarrollo rural.

#### *4.4 Mejorar la inclusión financiera y la innovación*



El sector privado también está desempeñando un papel crucial en la promoción de la inclusión financiera, en particular mediante el uso de tecnologías digitales. [Las innovaciones de tecnología financiera](#) en América Latina y el Caribe están ampliando el acceso a los servicios financieros para poblaciones que antes no estaban atendidas, lo que ayuda a abordar la desigualdad y la pobreza. La región ha presenciado un rápido surgimiento de empresas de tecnología financiera, y alrededor del 40% de estas empresas emergentes se centran en pequeñas y medianas empresas (PYME) que [tradicionalmente tienen un acceso limitado a los servicios bancarios](#). Este crecimiento es particularmente importante en el contexto de la inclusión financiera, ya que muchas empresas de tecnología financiera aprovechan la tecnología para crear soluciones fáciles de usar que satisfacen las necesidades únicas de estas poblaciones .

[Nubank , un banco digital](#) de Brasil , ha transformado el panorama bancario al brindar servicios financieros a millones de personas que no tienen acceso a servicios bancarios, incluidas las poblaciones rurales y de bajos ingresos. El modelo de negocios de Nubank no solo fomenta la inclusión financiera, sino que también apoya el espíritu emprendedor y el empoderamiento económico, en particular de las mujeres y las comunidades marginadas.

#### *4.5 Desafíos y oportunidades para la participación del sector privado*

A pesar de las importantes contribuciones del sector privado a la financiación de los ODS, aún quedan varios desafíos por resolver. Las barreras regulatorias, la falta de incentivos claros para las inversiones sostenibles y la inestabilidad política en algunos países de ALC siguen obstaculizando la participación del sector privado. Además, para alinear las inversiones del sector privado con los objetivos de desarrollo a largo plazo se necesitan alianzas más sólidas entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Sin embargo, las oportunidades para la participación del sector privado son enormes. Al promover un entorno regulatorio propicio, ofrecer incentivos fiscales para la inversión sostenible y alentar la innovación, los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden catalizar aún más las contribuciones del sector privado a los ODS. Con los marcos de políticas adecuados, el sector privado puede desempeñar un papel aún más importante en la financiación del desarrollo sostenible y la creación de resiliencia frente a futuras crisis.



## 5. Finanzas basadas en el riesgo: creación de resiliencia

En un momento en que los países de América Latina y el Caribe se esfuerzan por recuperarse de los impactos económicos de la COVID-19 y reconstruirse de manera más sólida, las finanzas basadas en el riesgo se han convertido en una estrategia crucial para garantizar la resiliencia a largo plazo. Las finanzas basadas en el riesgo se refieren a políticas y marcos financieros que incorporan una comprensión de diversos riesgos (como el cambio climático, los desastres naturales y las fluctuaciones económicas mundiales) en las decisiones de inversión pública, la gestión fiscal y la planificación económica. En el contexto de los ODS, adoptar un enfoque basado en el riesgo es vital para garantizar que las inversiones no solo sean eficientes sino también resilientes a futuras crisis.

### 5.1 Comprensión del riesgo en las políticas fiscales

La exposición de la región a los riesgos relacionados con el cambio climático, los desastres naturales y los shocks económicos externos hace que las finanzas basadas en el riesgo sean esenciales para el desarrollo sostenible. Como ya se mencionó, la región de América Latina y el Caribe es una de las más vulnerables a los fenómenos relacionados con el clima: países como los estados insulares del Caribe enfrentan huracanes con frecuencia, mientras que las naciones sudamericanas sufren inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra. Estos desastres naturales cuestan a la región miles de millones de dólares cada año y perturban gravemente la actividad económica.

Además, la región es muy sensible a los shocks económicos externos, incluidas las fluctuaciones de los precios de las materias primas y las alzas de las tasas de interés mundiales, que pueden desestabilizar los sistemas fiscales. Este nivel de exposición al riesgo subraya la necesidad de que los gobiernos integren evaluaciones del riesgo climático y de desastres en sus políticas fiscales y decisiones de inversión pública.

### 5.2 Instrumentos de Deuda Contingentes del Estado (SCDI)

Un enfoque prometedor para gestionar estos riesgos es el uso de instrumentos de deuda contingente al Estado (SCDI, por sus siglas en inglés). Estos instrumentos financieros brindan un alivio automático de la deuda en caso de una crisis, como un desastre natural o una recesión económica grave, lo que ayuda a los países a mantener la estabilidad fiscal. Ante shocks, los SCDI vinculan los pagos de la deuda de un país a condiciones específicas, como el crecimiento del PIB o eventos relacionados con el clima, lo que permite flexibilidad en el servicio de la deuda cuando se desata una crisis.

Varios países de América Latina y el Caribe han experimentado con SCDI. Por ejemplo, en 2019, [Barbados](#) emprendió una reestructuración significativa de su deuda soberana, que incluyó una disposición innovadora que vinculaba los reembolsos a los desastres relacionados con el clima. Esta reestructuración permitió al país pausar los pagos de la deuda en caso de un desastre natural importante, asegurando que los recursos necesarios pudieran redireccionarse hacia esfuerzos de recuperación inmediata. La reestructuración fue parte de un programa de reforma económica más amplio conocido como el plan de Recuperación y Transformación Económica de Barbados (BERT, por su sigla en inglés). Su objetivo era estabilizar la economía y mejorar la sostenibilidad de la deuda del país. Este modelo podría ampliarse en toda la región, proporcionando una red de seguridad financiera para los países altamente vulnerables a los desastres naturales y las crisis económicas.



### *5.3 Marcos Nacionales Integrados de Financiamiento (INFF)*

Otra herramienta clave para fortalecer la resiliencia fiscal es la implementación de los Marcos Nacionales Integrados de Financiamiento (MNFI). Estos marcos brindan un marco estratégico para alinear el financiamiento público y privado con las prioridades nacionales de desarrollo y los ODS, teniendo en cuenta diversos riesgos y asegurando que los recursos se asignen de manera eficaz.

[Varios países de América Latina y el Caribe](#) están en proceso de desarrollar e implementar INFF, que pueden ayudar a coordinar el financiamiento de múltiples fuentes (incluidos los presupuestos públicos, las inversiones privadas y la asistencia internacional para el desarrollo), al tiempo que incorporan evaluaciones de riesgos en la planificación financiera. Por ejemplo, Ecuador está trabajando activamente en su INFF para alinear mejor sus estrategias de financiamiento con los objetivos de desarrollo sostenible y mejorar la inversión en medidas de adaptación y resiliencia climática. Otros países de América Latina y el Caribe que han implementado INFF o están desarrollándolos son Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Surinam y Uruguay.

Los INFF también mejoran la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público, ya que proporcionan una hoja de ruta clara sobre cómo se movilizan y asignan los recursos para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo. Al incorporar estrategias basadas en el riesgo en estos marcos, los gobiernos pueden garantizar que sus sistemas fiscales estén mejor equipados para manejar futuras perturbaciones.

### *5.4 Bonos de resiliencia y bonos de catástrofe*

Los instrumentos financieros innovadores, como los bonos de resiliencia y los bonos de catástrofe, también están ganando terreno como mecanismos para financiar inversiones basadas en el riesgo. Los bonos de resiliencia están diseñados para financiar proyectos que reducen la vulnerabilidad a los desastres naturales, como barreras contra inundaciones, infraestructura resistente al clima y protección costera. Estos bonos ofrecen a los inversores la oportunidad de financiar proyectos de resiliencia, con el potencial de obtener rendimientos financieros vinculados al logro de resultados de reducción de riesgos.

Los bonos de catástrofe, o "cat bonds", transfieren el riesgo de desastres naturales de los gobiernos a los mercados financieros. A cambio de pagos periódicos de cupones, los inversores aceptan asumir las pérdidas financieras asociadas con una catástrofe predefinida, como un huracán o un terremoto. Si el desastre no ocurre, los inversores reciben el capital completo y los pagos de intereses; si ocurre, el gobierno queda exento de pagar parte de la deuda, que luego puede utilizarse para financiar las tareas de recuperación.

Los países del Caribe han sido líderes en el uso de bonos de catástrofe a través del [Mecanismo de Seguro contra Riesgos de Catástrofe del Caribe](#) (CCRIF), que brinda cobertura de seguro contra fenómenos meteorológicos extremos y terremotos. El CCRIF ha ayudado a países como Granada y Dominica a acceder a liquidez inmediata después de huracanes, lo que les ha permitido responder rápidamente a los desastres y financiar los esfuerzos de recuperación (después del huracán María en 2017, [Dominica](#) recibió un pago de aproximadamente USD 19 millones, mientras que [Granada](#) iba a recibir más de USD 44 millones para abordar los extensos daños causados por el huracán Beryl en 2024).



## 6. Recomendaciones de política

En vista de los desafíos fiscales y las oportunidades para alinear los sistemas fiscales con los ODS en América Latina y el Caribe, es fundamental elaborar un conjunto de recomendaciones de políticas sólidas y con visión de futuro para abordar las necesidades de sostenibilidad y resiliencia a largo plazo. Se proponen las siguientes acciones de política:

### *6.1 Alinear los sistemas fiscales con las prioridades de desarrollo*

Los países de América Latina y el Caribe se beneficiarían de alinear sistemáticamente sus políticas fiscales y presupuestos con sus prioridades de desarrollo. Algunos países de América Latina y el Caribe ya han adoptado marcos presupuestarios para los ODS que priorizan el gasto público en áreas críticas como la reducción de la pobreza, la acción climática y la protección social. Sería beneficioso ampliar estos esfuerzos mediante el desarrollo de indicadores detallados de desempeño que hagan un seguimiento de las contribuciones fiscales a los logros de desarrollo. Además, la integración de las prioridades de desarrollo en las políticas tributarias también puede garantizar que los ingresos fiscales se obtengan de maneras que sean equitativas y ambientalmente sostenibles.

### *6.2 Mejorar la movilización de recursos internos*

Para cerrar la importante brecha de financiamiento de los ODS, los países de América Latina y el Caribe podrían fortalecer la movilización de recursos internos. Las reformas tributarias deberían estar orientadas a ampliar la base impositiva, reducir la actividad económica informal y abordar la evasión fiscal. La región pierde miles de millones de dólares cada año por elusión y evasión fiscal, y cerrar estas lagunas es esencial para aumentar los recursos disponibles para inversiones relacionadas con los ODS. Además, las reformas tributarias deberían apuntar a aumentar la progresividad, asegurando que los grupos de mayores ingresos contribuyan con la parte que les corresponde.

Las inversiones en tecnologías digitales también pueden mejorar la eficiencia de la recaudación de impuestos. La adopción de sistemas de tributación electrónica en toda la región podría reducir los costos administrativos y aumentar el cumplimiento tributario. Algunos países de la región han logrado avances significativos en esta área, modernizando su infraestructura de recaudación de impuestos y mejorando el cumplimiento.

### *6.3 Aprovechar instrumentos financieros innovadores*

Ampliar el uso de instrumentos financieros innovadores es esencial para cerrar la brecha de financiamiento de los proyectos relacionados con el desarrollo. Los bonos verdes, los bonos de impacto social y los préstamos vinculados a la sostenibilidad ofrecen vías prometedoras para atraer capital privado al desarrollo sostenible. Algunos países de América Latina y el Caribe ya han emitido bonos verdes, recaudando miles de millones de dólares para financiar proyectos de resiliencia climática y energía renovable. La expansión





de estas iniciativas en toda la región y la garantía de que los gobiernos creen un marco regulatorio propicio para las finanzas verdes serán cruciales para su éxito.

Además, la combinación de capital público y privado a través de instrumentos como la financiación combinada puede mitigar los riesgos de inversión y atraer una mayor participación del sector privado en áreas como la infraestructura, la atención de la salud y la educación. Los gobiernos deberían asociarse con organizaciones internacionales y bancos de desarrollo para ampliar el uso de la financiación combinada para inversiones relacionadas con los ODS, especialmente en áreas con altos costos iniciales, como la energía renovable y la infraestructura sostenible.

#### *6.4 Fortalecer las políticas fiscales basadas en el riesgo*

Los países de América Latina y el Caribe deberían considerar la adopción de políticas fiscales resilientes a shocks externos, como el cambio climático, los desastres naturales y las fluctuaciones económicas globales. El financiamiento basado en el riesgo es fundamental para garantizar que las inversiones públicas sean sostenibles y puedan soportar crisis futuras. Instrumentos como los instrumentos de deuda contingente al Estado (SCDI), que ajustan los pagos de la deuda en función de las condiciones económicas o los desastres naturales, ofrecen una forma innovadora de gestionar los riesgos fiscales.

También se podrían ampliar los INFF para garantizar que la financiación pública y privada se ajuste a las prioridades nacionales de desarrollo y tenga en cuenta los riesgos futuros. Estos marcos ayudan a coordinar la financiación procedente de múltiples fuentes y garantizan una buena gestión de las inversiones en infraestructura crítica, protección social y resiliencia climática.

#### *6.5 Fomentar las asociaciones público-privadas (APP)*

Las asociaciones público-privadas son una herramienta vital para movilizar capital privado con el fin de financiar proyectos a gran escala relacionados con los ODS. Los gobiernos deberían fomentar un entorno regulatorio favorable a las asociaciones público-privadas, alentando la participación del sector privado en sectores como la energía renovable, la atención de la salud, el transporte y la educación. Al compartir tanto los riesgos como las recompensas, las asociaciones público-privadas pueden generar una inversión significativa del sector privado y, al mismo tiempo, garantizar que los proyectos estén alineados con los objetivos de desarrollo público. La expansión de las iniciativas exitosas en la región a otros países ayudará a abordar las brechas de infraestructura de la región y, al mismo tiempo, respaldará las metas de los ODS.

#### *6.6 Promover la transparencia y la rendición de cuentas*

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que las políticas fiscales sean eficaces en la consecución de los ODS. Los gobiernos deberían invertir en herramientas digitales y plataformas de datos abiertos que hagan un seguimiento del gasto público, lo que permitirá a los ciudadanos ver cómo se utilizan sus impuestos. Al promover prácticas de presupuesto abierto y la participación ciudadana, países como Costa Rica y Uruguay han mejorado la confianza pública y han garantizado que las políticas fiscales estén alineadas con las necesidades de la población.



## 7. Conclusión

En esta nota técnica se han analizado los complejos desafíos fiscales que enfrenta América Latina y el Caribe en su esfuerzo por recuperarse de la pandemia de COVID-19 y avanzar hacia sus objetivos de desarrollo. Los sistemas fiscales de la región están bajo presión, con niveles de deuda en aumento, mayores déficits fiscales y brechas significativas de recursos que deben abordarse para financiar el desarrollo a largo plazo. Sin embargo, al adoptar estrategias fiscales informadas sobre los riesgos, movilizar recursos internos y aprovechar el capital privado a través de instrumentos financieros innovadores, los países de América Latina y el Caribe pueden generar resiliencia y acelerar el progreso hacia el desarrollo sostenible.

La clave del éxito radica en alinear los sistemas fiscales con las prioridades de los ODS, fortalecer la movilización de recursos internos mediante reformas tributarias progresivas y ampliar el uso de la financiación verde y combinada. Las asociaciones público-privadas y la participación del sector privado serán esenciales para cerrar la brecha de financiación de los ODS, mientras que las políticas e instrumentos basados en el riesgo, como la deuda contingente del Estado, pueden ayudar a los países a sortear crisis futuras de manera más eficaz.

En última instancia, una combinación de estas estrategias permitirá a los gobiernos de ALC lograr la sostenibilidad a largo plazo, reducir la desigualdad y promover un crecimiento económico inclusivo, garantizando que nadie se quede atrás en la consecución de la Agenda 2030.